

Real Decreto XXXX/2021, de dd de mes, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de adaptación del riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en la cuenca baja del río Segura, en la Comunidad Valenciana como contribución al Plan Vega RenHace en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR) del Gobierno de España persigue entre sus objetivos ser referente en la protección y conservación de la riqueza de los bienes naturales como activo de sostenibilidad para los territorios y elemento fundamental para hacer frente a los desafíos climáticos, apostando por la descarbonización y la inversión en infraestructuras verdes. Asimismo, persigue impulsar la ciencia, la I+D+i y abordar el reto demográfico para garantizar la cohesión territorial y un crecimiento inclusivo en todo el territorio dentro de los límites ambientales

El PRTR incluye entre sus diez políticas palanca la política II «Infraestructuras y ecosistemas resilientes». Esta a su vez incorpora como componente 5 « espacio litoral y recursos hídricos », que prevé movilizar inversiones entre otras, para mejorar el control y la gestión del Dominio Público Hidráulico, y la implantación de nuevas tecnologías y tecnologías TIC en la gestión del agua. En concreto, la inversión 2 (C5.I2): Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación tiene entre sus actuaciones previstas las relacionadas con la implantación de los planes de gestión del riesgo de inundación vigentes, incluidas las medidas de prevención en materia de ordenación del territorio y urbanismo y las guías técnicas para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos en las zonas inundables y promover la adaptación al riesgo de inundación de distintos sectores económicos. Además, los municipios deberán abordar la ejecución de medidas de restauración fluvial en los entornos urbanos, la implantación de sistemas de drenaje sostenibles, la mejora de la permeabilidad de los entornos urbanos y su conexión con los valores medioambientales de los ríos en las zonas urbanas, sobre la base de las guías técnicas elaboradas y los objetivos de la planificación hidrológica.

Así pues, el hito nº 77 del PRTR, denominado, “restauración de las protecciones de cauces y riberas contra los riesgos de inundación” establece que para diciembre de 2022 deberán haberse recuperado ambientalmente al menos 200 km de cauces y riberas y protegido al menos 40 000 habitantes contra los riesgos de inundación.

En este marco, este Real Decreto, tiene por objeto establecer un programa de adaptación al riesgo de inundación de la Vega Baja del río Segura, que ponga en marcha los mecanismos para la adaptación de los elementos sometidos a un mayor riesgo y que sirva de ejemplo para el resto de elementos vulnerables situados en la zona.

La cuenca baja del río Segura, desde el límite con la región de Murcia y durante aproximadamente los últimos 40 km del río Segura hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo, ocupa el sur de la provincia de Alicante, abarcando la totalidad de la comarca del Bajo Segura y una pequeña parte de las comarcas del Vinalopó.

La ciudad más importante históricamente es Orihuela, con 78.505 habitantes (INE 2020), ribereña del río Segura, mientras Torrevieja, situada en la costa, es la primera en población con 84.667 habitantes (INE 2020). La comarca la componen 27 municipios repartidos en dos partidos judiciales: Orihuela y Torrevieja, con una población estable superior a las 350.000 personas con una superficie de unos 1.200 km².

El riesgo de inundación de la Vega Baja del Segura es inherente a su establecimiento, puesto que el río Segura históricamente es uno de los cauces de España con mayor riesgo de inundación y con más y mejores registros históricos, de forma que en los trabajos de implantación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y la implantación de la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión del riesgo de inundación han sido catalogadas ya 57 inundaciones históricas en la zona. Ya están documentadas algunas crecidas del Segura en la baja Edad Media, con 17 episodios de importancia durante el siglo XV. En 1651 la Riada de San Calixto causó 1500 fallecidos en Murcia con un caudal estimado de 1700 m³/s. En 1879 la célebre Riada de Santa Teresa superó los 1800 m³/s tanto en Murcia como en Orihuela, marcando los registros históricos más altos de la historia y causando más de 1000 fallecidos y numerosos daños en la Región de Murcia y la Vega Baja. En dicha riada el río Segura alcanzó en Murcia más de 10 metros de altura, por lo que durante todos estos episodios, apoyado por el cardenal Belluga, se procedió a realizar diversas obras y actuaciones para mitigar el riesgo de inundación asociado.

En el siglo XX se fueron sucediendo distintas riadas en 1916, 1919, 1926, 1929, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1953, 1966, 1972, 1973, 1974, 1982, 1986, 1987, 1988 y 1989, que han pasado a la historia superándose en muchas de ellas los 1000 m³/s de caudal máximo instantáneo, de forma que para mitigar estos grandes episodios de inundación se desarrolló el Plan de defensa contra avenidas de la cuenca del Segura aprobado por el Real Decreto-ley 4/1987, de 13 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones ocurridas en la Comunidad Autónoma Valenciana y en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se ha ido implantando progresivamente. Gracias a las obras de este Plan limitaron los daños causados por las inundaciones, evitándose el desbordamiento en las crecidas de 1997, 2000, 2001, 2003, 2012, 2016 y 2018.

Entre el 11 y el 16 de septiembre de 2019, tras unas lluvias medias areales en la zona de 145 mm en buena parte de la Región de Murcia y la provincia de Alicante con el pico de 521 mm en Orihuela, se produjo una importante avenida del Segura con desbordamientos en Cieza, Blanca, Archena, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, varias pedanías de la capital murciana, Beniel, y sobre todo en Orihuela y el resto de la Vega Baja. Los mayores problemas fueron en la Vega Baja, donde confluyen Segura y Guadalentín. En la Vega Baja se desbordó en todos los municipios desde Orihuela hasta Rojales, rompiendo diversas motas e inundando la huerta y varios cascos urbanos, entre ellos el centro de Orihuela.

La inundación de septiembre de 2019 evidenció la necesidad de preparar a la comarca de la Vega Baja, para que su población y economía puedan resistir de mejor forma los efectos de futuros episodios similares que puedan ocurrir. Unos extremos atmosféricos que, como señala la modelización climática, pueden ocurrir con mayor frecuencia en las próximas décadas.

En este sentido, con fecha 4 de mayo de 2021, se firmó un Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., y la Universidad Politécnica de Valencia, para el estudio con alto grado de detalle y la propuesta de nuevas medidas para la mejora de la gestión del riesgo de inundación en la Vega Baja del Segura.

A la vista de la magnitud del evento y de los daños causados, la Generalitat Valenciana también está desarrollando un Plan de Regeneración de la Vega Baja (Plan Vega RenHace) para impulsar un entorno resiliente que favorezca la regeneración económica y social de la Vega Baja, al tiempo que promueva un desarrollo territorial, absolutamente respetuoso con el medio ambiente, que prepare para futuros episodios de temporales, y que posibilite una mayor vertebración del territorio de la Vega Baja con el resto de la Comunidad Valenciana.

Este episodio ha puesto de manifiesto los posibles efectos del cambio climático en la zona, ya que los valores de precipitaciones registradas en toda la zona han superado con creces las estimaciones existentes hasta el momento, que concuerdan con los trabajos que se están desarrollando en materia de implantación de la Directiva 2007/60/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

Los trabajos de esta Directiva se fundamentan en tres fases; la primera, la evaluación preliminar de gestión del riesgo de inundación, que selecciona las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) en las que se realizan posteriormente los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, para después elaborar los planes de gestión del riesgo de inundación, proceso cíclico que se revisa y actualiza cada seis años.

En este sentido, el Plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Segura fue aprobado por el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero (BOE n.º 19, de 22 de enero de 2016), estableciendo entre otros objetivos, fomentar la preparación y la adaptación al riesgo de inundación de todos los bienes situados en las zonas inundables.

De este modo, y de acuerdo con el apartado 1 del artículo 21 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, la Confederación Hidrográfica del Segura llevó a cabo la revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación, aprobada mediante Resolución del Secretario de Estado de Medio Ambiente, de 12 de febrero de 2019. Igualmente se han actualizado los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de estas zonas, que han sido aprobados por el Comité de autoridades competentes de la Demarcación Hidrográfica del Segura en mayo de 2020.

Tomando como base los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación ya elaborados, se estima que unas 73.849 personas viven en las zonas inundables ya cartografiadas en esta zona. De los 27 municipios que forman parte de la Vega Baja del Segura, 13 de ellos incluyen áreas de riesgo potencial significativo de inundación y 24 tienen identificadas zonas inundables.

Debe destacarse la elevada vulnerabilidad de 5 residencias geriátricas, 1 hospital, 14 centros de salud y consultorios médicos y 33 centros educativos ubicados en zonas inundables.

Por su parte, con casi 13.000 ha dedicada a cultivos agrícolas y 118 explotaciones ganaderas, el sector agropecuario es el más afectado por las inundaciones. El 73 % de la superficie inundable de este tramo está ocupado por explotaciones agrarias.

En cuanto a las actividades industriales e infraestructuras, si bien la superficie potencialmente afectada no es especialmente notable respecto a otros usos más ampliamente ligados a las actividades y características socioeconómicas de la zona analizada, las indemnizaciones otorgadas en los últimos 15 años alcanzan los 22 millones de euros. De esa cantidad un 80% se abonó en los municipios de Orihuela, Almoradí, Redován y Cox.

Como indicador de la magnitud del riesgo de inundación existente en esta superficie se puede utilizar la cifra total de indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros en bienes asegurados por sus coberturas, tales como edificaciones, vehículos, etc., desde el año 2005 al 2020, que asciende a los 205 millones de euros en los términos municipales incluidos dentro de este tramo.

Estos indicadores reflejan la virulencia de las inundaciones en la zona y la necesidad de incrementar la resiliencia del sistema y disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones existentes, tanto públicas como privadas, como plan de actuación que emana de los contenidos del Plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Segura, y como fruto de las distintas guías técnicas elaboradas ya al efecto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Consorcio de Compensación de Seguros y que se encuentran disponibles en su página web. También se recoge en el presente real decreto el fomento y uso de una guía técnica elaborada por la propia Administración Valenciana en coordinación con el Instituto Valenciano de la Edificación.

Considerando lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en relación con los requisitos para la tramitación de subvenciones financiables con fondos europeos y las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos, el presente real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En este sentido, el principio de necesidad tiene su razón de ser en el interés general de garantizar la seguridad de las personas, el medio ambiente y los bienes, cuyo cumplimiento redundará en una garantía de seguridad para todos los ciudadanos. Como se ha expuesto, la necesidad es evidente, dado que los elevados daños que causan las inundaciones en los términos municipales de la Vega Baja del río Segura justifican la necesidad de poner en marcha acciones de adaptación al riesgo de inundación, invirtiendo en incrementar la resiliencia de estos municipios y fomentar la adaptación y preparación, puesto que concentran un elevado riesgo de inundación de acuerdo con los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación ya elaborados, lo cual se corrobora por ser municipios en los que las indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros para la reparación de daños tras las inundaciones son de las más elevadas.

Por su parte, el principio de eficacia se cumple con la aprobación de dicha norma mediante real decreto, al ser el instrumento adecuado para ello, estando previsto de esta forma en el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que dispone que el Consejo de Ministros aprobará por real decreto, a propuesta del Ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estando por lo tanto esta iniciativa normativa justificada por una evidente razón de interés general, basándose en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

Asimismo, se cumple el principio de proporcionalidad, dado que las ayudas propuestas en este real decreto son las necesarias para cumplir con las condiciones jurídicas y técnicas establecidas en la normativa. En este sentido, y en virtud del principio de proporcionalidad, este real decreto contiene únicamente la regulación imprescindible para atender la necesidad de poner en práctica estos proyectos de adaptación al riesgo de inundación y conseguir, además, una adecuada justificación de los trabajos ejecutados por los beneficiarios, sin incluir ninguna medida restrictiva de derechos, o imponer más obligaciones a los destinatarios que las adecuadas para la justificación de los trabajos, permitiendo además dedicar parte de la cuantía económica para la contratación de personal técnico de asesoría.

Respecto al principio de seguridad jurídica, es necesario destacar que el presente real decreto sigue lo expuesto en la normativa existente a tal efecto, siendo acorde a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas, administraciones y empresas que participen en los trabajos emanados del mismo.

En relación al principio de transparencia, como ya se ha señalado, durante la elaboración del proyecto la norma se ha sometido al proceso de información previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Respecto al trámite de audiencia pública previa previsto en el artículo 26.2 de la citada ley, se ha prescindido del mismo al concurrir graves razones de interés público, como son el riesgo existente de inundación y los daños causados en diversos edificios por el mismo, que requieren una agilidad en la actuación administrativa. Asimismo, se trata de una disposición que no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, si no que les concede una ayuda de la que se verán beneficiados.

Por último, respecto al principio de eficiencia, con la aprobación de la presente norma, si bien se produce un incremento de las cargas administrativas de aquellos beneficiarios de la misma, éstas son compensadas notablemente con el beneficio que obtendrán al incrementarse la seguridad de las personas y disminuir los daños que producen las inundaciones en sus bienes, suponiendo el mínimo coste imprescindible para ello, lo que permite poner en marcha un ambicioso conjunto de medidas para evitar daños por inundaciones, pérdidas económicas, compensaciones y ayudas a la recuperación de los daños, invirtiendo de esta forma en labores de prevención en vez de recuperación tras un episodio de inundación.

Desde el punto de vista de la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, el presente real decreto se fundamenta en la regla 13.8 del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Este real decreto se ha sometido al trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, así como a informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dd de mes de año,

DISPONGO:

Artículo 1. *Objeto y finalidad.*

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de medidas para la adaptación al riesgo de inundación de edificaciones, equipamientos, instalaciones, explotaciones agrícolas y/o ganaderas, vías de comunicación o núcleos urbanos existentes en el ámbito de la cuenca del Segura en la provincia de Alicante, con carácter excepcional de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley.

El ámbito territorial de este real decreto es la Vega Baja del Río Segura que queda definida por los siguientes términos municipales de la comarca del Bajo Segura, ordenados por población: Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Almoradí, Callosa de Segura, Rojales, Guardamar del Segura, Albaterra,

Catral, Redován, San Fulgencio, Dolores, Cox, Bigastro, San Miguel de Salinas, Benejúzar, Los Montesinos, Rafal, Formentera del Segura, Benijófar, Algorfa, Granja de Rocamora, Jacarilla, San Isidro, Benferri, Daya Nueva y Daya Vieja, a los que se han de sumar el Realengo y San Felipe Neri, pedanías de Crevillente.

2. La finalidad de estas ayudas es adaptar al riesgo de inundación edificaciones, equipamientos, vías de comunicación, núcleos urbanos y otro tipo de instalaciones o explotaciones de carácter industrial, agrícola o ganadero en los términos municipales indicados, de forma que se minimicen los daños que producen las inundaciones.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

1. Estas subvenciones se regulan, además de por lo dispuesto en este real decreto y las resoluciones de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia y supletoriamente por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021 y, en base a ello, se regirán por las siguientes disposiciones:

- a) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- b) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el resto de normativa que lo desarrolle
- c) Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021
- d) Resolución de 29 de abril por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- e) Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- f) Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Será beneficiaria directa de esta subvención la Generalitat Valenciana, que deberá destinar el importe de la misma según se establece en el apartado 2 siguiente. Dicha entidad deberá cumplir los requisitos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en especial los específicos contenidos en el capítulo II.

2. Podrán ser destinatarios últimos de estas ayudas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo obras o actuaciones que tengan por objeto implementar medidas para la adaptación al riesgo de inundación de edificaciones, equipamientos, instalaciones, explotaciones agrícolas y/o ganaderas, vías de comunicación o núcleos urbanos existentes en la Comarca de la Vega Baja del río Segura, de forma que se minimicen los daños que producen las inundaciones.

Artículo 4. Actuaciones a financiar.

1. La tipología de las actuaciones a financiar incluirá, a modo indicativo y no exhaustivo:

a) Adquisición de equipamientos o materiales que impidan la entrada de las aguas o faciliten su evacuación tales como barreras temporales o permanentes, bombas de achique, válvulas antirretorno y otros elementos

b) Ejecución de obras tales como impermeabilización o rediseño de fachadas, construcción o mejora de muros perimetrales, protección o sellado de huecos (ventanas, rejillas de ventilación, patinillos de instalaciones...), protección o traslado de instalaciones vulnerables (cuadros eléctricos, transformadores, calderas, depósitos de combustible...)

c) Adaptación al riesgo de inundación de explotaciones agrarias (instalación de compuertas y/o barreras anti-inundación temporales y/o permanentes, sellado e impermeabilización de paredes exteriores y soleras, elevación o sellado de umbrales de entrada, elevación o protección de infraestructuras y/o de equipamientos, creación, ampliación o mejora de sistemas de drenaje, rediseño de redes y sistemas de riego de forma que discurran bajo el terreno natural, creación de bandas de protección natural, reordenación/rotación de cultivos y selección de especies inundorresistentes, creación de zonas de inundación temporal controlada, etc.).

d) Instalación de elementos que permitan adaptar y proteger explotaciones ganaderas (alojamiento temporal para los animales, apriscos permanentes o temporales, construcción de rampas de acceso, barreras anti-inundación, elevación del suelo de naves, elevación y/o protección de equipamiento/instalaciones, sellado e impermeabilización de muros exteriores, etc.).

e) Implantación de medidas encaminadas a la mitigación de riesgos mediante una mejor gestión de los episodios de inundación, tales como la elaboración y/o implantación de planes de protección civil de ámbito municipal.

f) Adquisición de terrenos y la indemnización de cualesquiera otros derechos que pudieran resultar afectados en actuaciones destinadas a la mejora del riesgo de inundación en zona urbana.

g) Otras actuaciones de adaptación de vías de comunicación y cualquier otra infraestructura o bien existente en la zona inundable, incluyendo la implantación de las medidas identificadas en los planes regionales o municipales de actuación frente a inundaciones.

2. Se realizará un reparto sectorial según los siguientes criterios:

a) La Generalitat Valenciana destinará al menos un 50% del importe total de esta subvención para realizar las obras necesarias que permitan la adaptación al riesgo de inundación de núcleos poblados o barrios, y edificios, instalaciones, infraestructuras y equipamientos existentes en las entidades locales enumeradas en el artículo 1 de este real decreto, de forma que se minimicen los daños que producen las inundaciones en poblaciones y bienes públicos. Para ello, en lo relativo a los edificios públicos la Generalitat Valenciana ejecutará actuaciones en materia de adecuación y resiliencia frente a inundaciones en un/os edificio/s de titularidad pública y uso público. En lo relativo a edificios residenciales y espacios urbanos, la Generalitat Valenciana ejecutará actuaciones en materia de fomento de la adaptación al riesgo de inundación en áreas residenciales donde preferiblemente se pueda actuar tanto a nivel de edificios existentes como a nivel de espacio urbano.

b) La Generalitat Valenciana destinará al menos un 25% de la subvención al sector agropecuario, para lo cual deberá realizar una convocatoria de concurrencia competitiva que, rigiéndose por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y cumpliendo con el derecho de la Unión Europea, financie medidas de adaptación al riesgo de inundación de bienes de titularidad de las comunidades de regantes, juzgados de aguas, sindicatos de riegos u otras entidades de regadío. También podrán acceder a estas ayudas los titulares de explotaciones ganaderas que puedan acreditar la titularidad de la explotación para realizar actuaciones de adaptación al riesgo de inundación tales como las recogidas en los apartados 1.a), b), c) y d) del presente artículo.

c) La Generalitat Valenciana podrá destinar hasta un 10% del importe total de la subvención prevista en su ámbito territorial para la contratación de personal técnico y realización de estudios, informes y trabajos de investigación. La contratación de este personal podrá realizarse de forma directa, a través de encargos a medios propios personificados o mediante licitaciones públicas.

d) No podrán beneficiarse de subvención aquellas obras o actuaciones que estén destinadas a reparaciones o mejoras que no tengan relación directa con la adaptación al riesgo de inundación. Del mismo modo, todas las actuaciones deberán respetar los requisitos impuestos en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y normativa derivada, así como de la normativa urbanística que le resulte de aplicación.

e) Los beneficiarios habrán de ejecutar y justificar las medidas citadas antes del 31 de diciembre de 2026. Podrán incluirse en el ámbito de este real decreto adicionalmente las actuaciones de adaptación al riesgo de inundación que se hayan realizado en los doce meses anteriores a la aprobación del mismo.

Artículo 5. *Obligaciones de los beneficiarios.*

Los beneficiarios de las subvenciones establecidas en el artículo 1 quedarán sujetos a las obligaciones establecidas en los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado reglamento.

Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las siguientes obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:

Las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH), así como el cumplimiento de la metodología de seguimiento de las ayudas conforme a lo previsto en el PRTR, en el artículo 5.2 del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo. En particular se cumplirá con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia de España (CID), y las condiciones del etiquetado climático y digital y deberán ser tenidas en cuenta las medidas previstas en el citado Reglamento dirigidas a evitar la doble financiación (artículo 9) y las medidas contra el fraude, corrupción y conflicto de intereses [artículo 22.2.b)].

Igualmente, en virtud de lo establecido en el artículo 8 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre, todas las entidades ejecutoras del PRTR deberán aportar la información sobre el nombre y fecha de nacimiento del titular real del perceptor final de las ayudas en los términos establecidos en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, en los términos en los que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En este sentido, el beneficiario y, en su caso, los beneficiarios o contratistas derivados, deberá acreditar dicha información en la forma en la que así se lo exija el órgano concedente.

El beneficiario deberá aportar la aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 8.2 de la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, todas las entidades ejecutoras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deberán aportar declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión. El beneficiario deberá cumplimentar la declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, conforme al modelo del Anexo V de la citada Orden.

Esta convocatoria complementará y apoyará la consecución del hito 77 (C5.I2) del PRTR: “al menos 200 km de cauces y riberas restaurados y al menos 40.000 habitantes protegidos contra el riesgo de inundación”

Artículo 6. *Procedimiento de concesión.*

1. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto, atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren razones de interés público que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley.

2. La concesión de estas subvenciones se instrumentará mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 7. *Cuantía, financiación y compatibilidad.*

1. El importe total de la subvención contenida en este real decreto a la Generalitat Valenciana asciende a diez millones de euros (10.000.000).

2. El importe de la subvención prevista se abonará con cargo al presupuesto del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia.

3. Estas ayudas serán compatibles con la percepción de otras que pudieran proceder de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, comunitarios o de cualquier otra organización internacional, siempre que no se destinen a cubrir los mismos costes subvencionados por esta convocatoria y con idéntica finalidad. No obstante, se deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades ejecutadas.

Artículo 8. *Régimen de pago y justificación.*

1. Las subvenciones se abonarán con carácter anticipado para la financiación de las actuaciones referidas en el artículo 4 de este real decreto, de conformidad con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El pago de las ayudas se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. La presentación de la justificación de esta subvención por la Generalitat Valenciana se realizará ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en un plazo máximo de seis meses a contar desde el 31 de diciembre de 2026.

3. En atención a la naturaleza de la presente subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las comunidades autónomas justificarán estas ayudas a través de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, que contendrá los requisitos previstos en el artículo 72 del citado real decreto

4. Igualmente, esta comunidad autónoma deberá comunicar a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente los procedimientos de reintegro que pueda iniciar, al amparo de lo previsto en la Ley General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, en los expedientes de concesión de las ayudas previstas en este real decreto y devolver los importes reclamados en los mismos, con independencia de su efectiva satisfacción por el beneficiario de sus ayudas, una vez que la correspondiente resolución de reintegro adquiera firmeza. Todo ello en los términos y plazos que se especifique en la resolución de concesión prevista en el artículo 6 de este real decreto.

Artículo 9. *Incumplimientos y reintegros.*

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida es la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Artículo 10. *Comisión Bilateral de Seguimiento.*

Se constituirá una Comisión de Seguimiento con el fin de realizar el seguimiento conjunto y coordinar las actuaciones derivadas de la implantación de este real decreto.

La Comisión de Seguimiento estará constituida por el Director General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (que la presidirá), el Presidente de la Confederación

Hidrográfica del Segura y por la persona titular de la Dirección General competente en materia de Análisis y Políticas Públicas de la Generalitat Valenciana y por los suplentes que se nombren a tal efecto.

La Comisión Bilateral de Seguimiento velará por el adecuado cumplimiento de este real decreto. Su funcionamiento se acogerá a lo dispuesto sobre órganos colegiados en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público respetando siempre el marco general establecido en el presente real decreto y sin que afecte a un incremento de la dotación presupuestaria.

La Comisión Bilateral de Seguimiento celebrará sesiones ya sea por videoconferencia o presenciales, al menos, una vez al año. Asimismo, se podrá reunir por iniciativa de cualquiera de las partes.

La Comisión realizará, además de las funciones recogidas en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las siguientes:

1. Coordinar las actuaciones relacionadas con el objeto del presente Real Decreto.
2. Formular y acordar, en su caso, las actuaciones señaladas en el artículo 4.
3. Establecer la metodología específica para evaluar la eficacia en el desarrollo y cumplimiento de este real decreto, analizando su desarrollo y cumplimiento y formulando las oportunas propuestas.
4. Acordar los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones.
5. Interpretar las dudas que pudieran surgir en la ejecución del Real Decreto y resolver cuantas cuestiones, incidencias o controversias pudieran plantearse.

Artículo 11. *Publicidad.*

Conforme al artículo 28.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 31.1 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los beneficiarios de estas ayudas, para dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actuaciones derivadas de este real decreto deberán incluir en cada edificación o instalación adaptada al riesgo de inundación una placa que cite el presente real decreto e incluya la imagen corporativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Igualmente deberá citarse este real decreto en las convocatorias que realicen las citadas autonomías, que deberán igualmente incluir referencias al mismo en la documentación electrónica que preparen en los portales de internet autonómicos y municipales.

Igualmente, serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Asimismo, en virtud de la financiación de estas ayudas con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se seguirá lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, debiendo los beneficiarios cumplir con los compromisos en materia de comunicación y asumir las obligaciones de información y publicidad que se deriven de las instrucciones específicas que se emitan por la autoridad competente relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Artículo 12. *Régimen sancionador.*

Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudiesen ser cometidas por los beneficiarios se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Disposición final primera. *Título competencial.*

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y

coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como al amparo de lo dispuesto en la regla 29.^a que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Disposición final segunda. *Habilitación normativa.*

La Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico podrá adoptar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».